

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que el abogado señor Juan Pablo Solorza Kojakovic, en representación de la Compañía General de Electricidad S.A. (en adelante “CGE”), ambos domiciliados en calle Presidente Riesco N° 5561, piso 17, comuna de Las Condes, deduce reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 12.361 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (en adelante “SEC”) de 26 de mayo de 2022 y en contra de la Resolución Exenta N° 35.426 de 23 de agosto de 2022, de la misma Superintendencia, esta última al rechazar su recurso de reposición administrativo en contra de la primera que, en definitiva, le aplicó una multa equivalente a 1.500 UTM. Fundando su reclamo señala lo que sigue:

1.- Mediante Oficio N° 106.133 de 22 de febrero de 2022, la SEC le formuló a su parte el siguiente cargo: “facturar incorrectamente los consumos de 301 clientes, lo que constituye una infracción a lo establecido en el artículo 222° letra d) del Decreto Supremo N° 327 de 12 de enero de 1997 del Ministerio de Minería, en relación al artículo 225° letra x) de la Ley General de Servicios Eléctricos, lo que se desprende de la información aportada por la empresa en su carta del ANT 1) y a lo señalado en el punto 2 del presente oficio”.

2.- Su parte presentó el correspondiente escrito de descargos el 22 de marzo del año pasado señalando que ya se procedió a regularizar el sector tarifario de cada cliente, de modo que todos se encuentran con los datos correctos en el sistema y que a cada cliente cuya facturación fue menor se le otorgaron facilidades de pago de hasta doce cuotas, a lo que agrega que para un grupo de cien clientes



el resultado de la corrección fue un abono, el que se materializó en una cuota, informando a cada cliente, mediante una carta, de lo sucedido.

3.- Sin embargo, pese a que la autoridad reconoció que el universo de clientes afectados es menor (201 clientes), que su parte no obtuvo un beneficio económico y que su parte nunca antes había sido sancionada por una situación como la descrita, le aplicó y le mantuvo la aludida multa que, a la fecha de la reclamación, ascendía a \$86.335.500, vulnerando así el principio de proporcionalidad, explayándose en el reclamo sobre de lo que se ha entendido al respecto por la doctrina y por el Tribunal Constitucional.

4.- Expresa que su parte alegó la incompetencia del jefe de la División de Ingeniería de Electricidad para formular cargos y la SEC señaló que tal alegación es improcedente por haberse representado a la autoridad en la fase recursiva del proceso sancionador y que la delegación de facultades fue hecha de acuerdo al artículo 41 de la ley 18.575 y la letra g) del artículo 7 de la ley 18.410. El primer argumento —continúa la parte reclamante— dado por la SEC pretende, entonces, que una ilegalidad de parte de este organismo puede ser validada por no haberlo representado su parte. Y en cuanto al segundo, hace presente lo que al efecto señala el artículo 17 de la ley 18.410.

5.- Pide que se acoja su reclamación y se dejen sin efecto los actos administrativos mencionados, que se le absuelva de los cargos formulados por la SEC y que se condene en costas a esta repartición. En subsidio, pide que se rebaje el monto de la multa por una cuestión de proporcionalidad.

2°) Informa la autoridad reclamada en los siguientes términos:



1.- La acción de reclamo es infundada por cuanto lo obrado por la SEC se ha ajustado a derecho. Describe enseguida el procedimiento que ha de seguirse tratándose de infracciones y sanciones dentro de su ámbito y agrega que la reclamante, al señalar que subsanó los errores de facturación denunciados, está reconociendo la validez de los actos administrativos que impugna y que, en cuanto a la proporcionalidad de la multa impuesta, esta se ajustó a los parámetros que la ley prevé.

2.- En cuanto a la incompetencia del Jede de la División de Ingeniería de Electricidad para formular cargos, esta alegación ha debido hacerse antes de formular objeciones a la proporcionalidad de la sanción pecuniaria y, en todo caso, dicho personero obró mediante delegación de facultades a través del acto administrativo que consigna y que se funda en lo previsto en el artículo 41 de la ley 18.575 y en la letra f) del artículo 7° de la ley 18.410.

Pide el rechazo de la reclamación.

3°) Que el artículo 19 de la ley 18.410 señala, en lo que interesa, que “Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia **no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar**, podrán reclamar de las mismas, dentro del plazo...” Se trata, entonces, de un recurso de ilegalidad, no de uno de doble instancia de lo decidido por la autoridad administrativa y, por ende, debe esta Corte acoger una reclamación de esta naturaleza sólo cuando llegue a la conclusión que lo obrado por la SEC es ilegal o no se ajusta a la reglamentación vigente sobre una determinada materia propia de su ámbito. No es ni puede ser esta

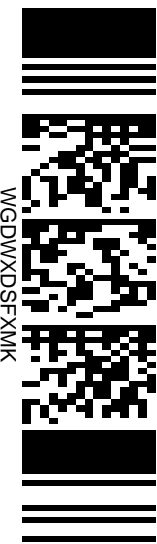


Corte de Apelaciones un ente técnico que pueda resolver temas que son propios del organismo especializado de la Administración.

4°) Que a o pesar que ha sido alegado al final, debe analizarse, en primer término, el argumento de la reclamante en cuanto a que las resoluciones impugnadas habrían sido dictadas en virtud de una delegación de funciones que la ley no autoriza.

5°) Que, sobre el particular, cabe consignar que el Jefe de la División de Ingeniería de Electricidad de la SEC tiene facultades para formular cargos pues aquellas le fueron delegadas por la superioridad del servicio en virtud de la Resolución Exenta N° 534 de 2011, publicada en el Diario Oficial de 9 de marzo de 2011, la que se funda en el artículo 41 de la ley 18.575, sobre “Bases Generales de la Administración del Estado, Administración Pública, Probidad Administrativa”, que señala, en su enunciado, que “El ejercicio de las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado, sobre las bases siguientes:...” y, en lo específico, en lo que consigna la letra f) del artículo 7° de la ley 18.410: “Corresponderá especialmente al Superintendente: f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de las plantas directiva, profesional o técnica de la Superintendencia”.

6°) Que a lo anterior cabe agregar que, tal como lo sostiene la SEC, tal alegación, la de la incompetencia de quien le formuló los cargos, es una que sólo se ha planteado a propósito de esta reclamación, de modo que nunca estuvo la Administración en posición de pronunciarse sobre aquella. Del mismo modo, y como se esbozó, lo primero que ha argüido CGE ha sido la falta de proporcionalidad de la



multa, de modo que tácitamente ha aceptado la validez del acto administrativo que impugna.

7°) Que, en lo que hace a la proporcionalidad de la sanción pecuniaria, el artículo 16 A de la ley 18.410 permite sancionar las faltas leves —como es el caso de autos— con una multa que puede llegar hasta las 500 UTA, esto es, 6.000 UTM, imponiéndose en la especie 1.500 UTM. Esta sanción parece proporcional a los hechos que motivaron la formulación, a la capacidad económica de la empresa reclamante y a la necesidad de evitar que se reiteren hechos como los sancionados, cumpliéndose los parámetros contemplados en el inciso segundo del artículo 16 de la ley 18.410.

8°) Que, en consecuencia, no advirtiéndose ilegalidad alguna en el obrar de la SEC, el reclamo debe ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 18.410, **se rechaza** la reclamación deducida en estos antecedentes, sin costas.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Mera, quien estuvo por acoger la reclamación en cuanto por ella se da por infringido el principio de proporcionalidad y, en consecuencia, reducir la multa impuesta a 500 UTM. Tuvo presente para ello:

I.- Que, tratándose de derecho administrativo sancionador, rigen, *mutatis mutandis*, los principios que informan el derecho penal, entre ellos el de la proporcionalidad de la sanción. Y sobre el particular, debe tenerse presente que la infracción consiste en una errada facturación sólo a 301 clientes. De estos 301 clientes, a 201 se les facturó una suma **menor** a la real, y a 100 de ellos, se les hizo una facturación mayor a la que correspondía.



II.- Que CGE subsanó tales yerros antes de la formulación de cargos, permitiéndoles a los 201 clientes que recibieron una facturación inferior a la real, pagar la diferencia hasta en 12 cuotas; y a los 100 que pagaron una factura mayor a la correcta, se les abonó la diferencia en una sola cuota.

III.- Que, en consecuencia, si la propia SEC ha dicho que se trata de una falta “leve”, que se sanciona hasta con 500 UTA, que CGE no había incurrido en conductas semejantes en el pasado, que el universo de clientes afectado es escaso —301, de los cuales sólo 100 recibieron una facturación superior a la real, abonándoseles la diferencia; y a los otros 201 se les dio facilidades de pago por lo que adeudaban respecto del monto real de la factura—, empleando los cinco factores de ponderación de la multa, señalados en el inciso segundo del artículo 16 de la ley 18.410, esto es, “a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado; b) El porcentaje de usuarios afectados por la infracción; c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; y e) La conducta anterior”, la multa ha de fijarse en un monto proporcional a la infracción y no puede, por tanto, superar las 500 UTM.

Redacción del ministro señor Mera, quien no firma por ausencia.

Regístrese y comuníquese.

N° 446-2022.

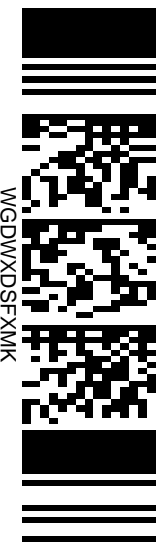




WGDVXDSFXMK

Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Suplente Maria S. Jorquera B. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.